



La gran
minería a debate:
de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

Este ensayo forma parte del informe Estado del poder 2015 del TNI.
Para leer el resto de ensayos y los infográficos www.tni.org/stateofpower2015.

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

Durante una visita a Mozambique en septiembre de 2014, fue testigo de una protesta contra el gigante minero brasileño Vale. Los vecinos y vecinas de la aldea de Bagamoyo, situada junto a una mina de carbón de Vale, estaban luchando contra la construcción de una valla de metal que atravesaría su comunidad. Según Vale, lo que se estaba vallando eran ‘tierras desocupadas’ que había arrendado al Gobierno mozambiqueño. Y si algún ‘intruso’ tenía un accidente en aquella zona, la compañía sería responsable de ello.

Charlando con algunas personas de la comunidad mientras preparaban los carteles para la protesta, me quedó muy claro que esas tierras ‘desocupadas’ eran, en realidad, un patrimonio común de la aldea. Aunque las casas se encontraban dentro de la aldea propiamente dicha, durante generaciones, la comunidad había vivido de las tierras circundantes e incluso había usado parte de ellas como cementerio. El Gobierno mozambiqueño había incluido estas tierras en el contrato de arrendamiento para las operaciones mineras de Vale sin informar a la comunidad de Bagamoyo. Sus cultivos y árboles de mango estaban allí. Y también allí pastaban sus vacas y cabras. Las tierras eran fuente de leña y carbón para cocinar, paja para construir techos, bastones para construir rejillas donde secar las raíces de mandioca y arcilla para la construcción. Vale ya había arrasado con sus excavadoras algunos de los hornos que estaban contruidos junto a los depósitos de arcilla.

¿Qué ha otorgado a las grandes empresas mineras el poder de acaparar tierras que ya tienen un uso comunitario tradicional en todo el mundo? ¿Por que los Gobiernos de todas las tendencias —ya sean dictatoriales, liberales o socialistas— bautizan a estas empresas del sector extractivo como ‘socios para el desarrollo’ y

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

renuncian a toda función de custodia de los recursos naturales de su país y de los derechos y el bienestar de sus propios ciudadanos y ciudadanas?

Este ensayo analiza las fuentes de poder de las grandes compañías mineras a través de los cambios históricos que se han producido en el papel de las empresas estatales y privadas en las estrategias de desarrollo económico, y la nueva —y promiscua— relación íntima entre los Gobiernos y las empresas mineras. También pone de relieve los instrumentos utilizados para ejercer el poder, desde los acuerdos de libre comercio a los acuerdos de protección de inversiones, pasando por el acaparamiento de tierras. Explora la ofensiva ideológica de la gran minería a través de los centros de estudio subvencionados por las empresas y la concesión de becas universitarias vinculadas con programas favorables a la minería, además del fenómeno de 'puertas giratorias' entre el Gobierno y los altos cargos de las empresas. También repasa las herramientas que se usan para promover la imagen corporativa, como la participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la filantropía de alto nivel y los caramelos para las comunidades locales, en forma de clínica o escuela, que se presentan como 'responsabilidad social corporativa'. Asimismo, examina cómo las empresas mineras ejercen poder ilegalmente a través de sobornos, prácticas de espionaje e infiltración en movimientos populares. Por último, el ensayo esboza algunas de las formas innovadoras en que comunidades y trabajadores y trabajadoras están haciendo frente al poder y la lógica de la gran minería, partiendo de mis 20 años de experiencias sindicales para la construcción de una solidaridad global.



Margie Adam / ArtWork

Cómo las empresas mineras consiguieron su poder

Existen muchas y excelentes descripciones del neoliberalismo hoy en día, con sus íntimas relaciones entre corporaciones y Gobiernos, y sus recetas de desregulación, privatización, recortes en gasto social y reducción

del Estado.¹ Una forma sencilla de entender el neoliberalismo pasa por recordar qué vino a sustituir. El derrumbe financiero de la década de 1930, enmarcado entre dos guerras mundiales y los horrores del fascismo, dio lugar a que a principios de los años cincuenta se diera una confluencia de apoyos por un compromiso de clase entre el capital y el trabajo. Así, se estableció a escala internacional un nuevo orden mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods para la estabilización de las divisas, y la creación de instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se instauró el consenso general de que los Estados debían colaborar con los procesos de mercado, además de intervenir en ellos o incluso reemplazarlos cuando fuera necesario. El 'liberalismo integrado' marcó el comienzo de una era en que el mercado y las corporaciones operaban dentro de restricciones sociales y políticas. El Estado fijaba un marco regulador fuerte, pero a menudo también se encargaba de encabezar iniciativas económicas e industriales. La planificación dirigida por el Estado y la propiedad estatal de sectores estratégicos como la minería y la producción de acero y automóviles eran algo habitual, tanto en el Norte como en el Sur.²

Todas estas restricciones sobre el poder del capital en el período de la posguerra fueron abandonadas a mediados de la década de 1970. Los dueños del capital estaban asustados por las nuevas energías liberadas en las rebeliones de los años sesenta y setenta por parte de estudiantes, activistas de los derechos civiles, trabajadores y trabajadoras, y mujeres. Un radical movimiento anticolonialista y un militante movimiento contra la guerra de Vietnam intensificaron aún más la percepción de amenaza del poder corporativo. Todos estos movimientos estaban reivindicando mayor inclusión social, más derechos y una ciudadanía plena. En el famoso informe de la Comisión Trilateral de 1975, elaborado con el fin de volver a afinar las medidas para proteger los intereses de las élites estadounidenses, europeas y japonesas, uno de sus autores principales, Samuel Huntington, señalaba que existían problemas de gobernanza derivados de un "exceso de democracia".³ Los intereses corporativos se reafirmaron con contundencia para recuperar los principios básicos de la visión liberal: el individualismo feroz del emprendedor privado y el fundamentalismo de mercado. Se establecieron nuevos 'centros de estudios' de derechas para proseguir con el ataque ideológico.

El poder ilimitado del que gozan las empresas mineras es uno de los frutos de este orden mundial neoliberal, ya que precipitó la privatización del acceso a los recursos naturales en numerosos países. En el Sur, el instrumento preferido para reducir el tamaño de los Gobiernos, e imponer la desregulación y la aceptación generalizada de la inversión extranjera directa como condición indispensable para el desarrollo económico, fueron los programas de ajuste estructural. Los países se encontraron atrapados en la trampa de la deuda cuando los términos de pago de los préstamos obtenidos a un bajo interés de las instituciones financieras del Norte se dispararon de golpe. Se vieron obligados a solicitar la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que iba acompañada de 'condicionalidades' para poder seguir recibiendo más crédito. Las condicionalidades básicas consistían en la devaluación de la divisa, la privatización, la desregulación y los recortes en el gasto social.

A raíz de ello, se inició un proceso de privatización generalizada de numerosas industrias públicas; entre las primeras, se contaban muchas empresas mineras estatales. A modo de ejemplo, la mayor compañía de hierro del mundo, la empresa estatal brasileña Companhia Vale do Rio Doce, fue privatizada en 1997 mediante una subasta pública. La sociedad civil brasileña tildó la operación de fraude, ya que el precio de venta, 3.300 millones de dólares, no incluyó algunos activos clave y estaba muy por debajo de la evaluación que había realizado la misma compañía, unos 40.000 millones de dólares. Incluso diez años más tarde, los movimientos sociales brasileños consiguieron reunir más de un millón de votos para que la empresa volviera a ser de propiedad estatal.

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

Los Gobiernos renunciaron a sus funciones de regulación a favor de una mayor flexibilidad en los regímenes laborales y fiscales; todo para crear un 'entorno favorable a los negocios' con el que atraer a los inversores extranjeros. Las empresas mineras, tildadas de depredadoras corporativas durante las luchas anticolonialistas y antiimperialistas, fueron rebautizadas como 'socios para el desarrollo'.

En el Norte, el instrumento para pasar del 'liberalismo integrado' al neoliberalismo fue el de los acuerdos de libre comercio, mejor denominados 'acuerdos para el privilegio de inversores'. Estos fueron mucho más allá de los contenidos establecidos en las negociaciones comerciales, como los aranceles sobre las importaciones, y terminaron abriendo un sinfín de barreras no arancelarias al comercio.

Las cláusulas que requerían que se otorgara trato nacional a los inversores extranjeros y que prohibían los requisitos de desempeño entrañaban que el Gobierno anfitrión de acogida no pudiera tratar a los inversores extranjeros de manera distinta a los empresarios locales. Las cuotas para el empleo de ciudadanos del país de acogida y sobre el uso de materias primas o proveedores nacionales se anularon. Según las cláusulas inversor-Estado, un Gobierno anfitrión incluso podía ser demandado por adoptar políticas para proteger la salud pública o el medio ambiente si estas interferían en las ganancias previstas por el inversor.

En 1997, el Gobierno canadiense fue demandado por Ethyl Corporation por prohibir las importaciones de gasolina que contenían un aditivo tóxico llamado MMT. Según las cláusulas inversor-Estado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esta medida suponía quebrantar el tratado. Canadá decidió llegar a un acuerdo, derogando la prohibición impuesta sobre el MMT, pidiendo disculpas y pagando una multa de 13 millones de dólares. Si los tratados de libre comercio otorgan a las corporaciones este tipo de poder sobre países como Canadá, ¿cuánto más no lo hacen con respecto a países más pobres? En El Salvador, la empresa Pacific Rim ha estado exigiendo un permiso para un proyecto de extracción de oro que representa una amenaza para la principal fuente de agua potable del país. Dos Gobiernos sucesivos se han negado a conceder ese permiso a la empresa minera y el país se encuentra ahora enfrentado a una costosa demanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El efecto disuasorio sobre cualquier Gobierno que intente proteger el interés público es enorme.

Para cubrir las inversiones mineras sin una protección integral a través de las cláusulas de los tratados de libre comercio, se introdujeron los tratados bilaterales de inversión (TBI) y los acuerdos de protección de la inversión extranjera (APIE). Ambos ponen un fuerte acento en los derechos de los inversores y, sin embargo, no dicen nada sobre sus responsabilidades. El Gobierno canadiense ya ha ratificado APIE con 27 países desde 1990, y tiene otros 23 proyectados. Un APIE puede rescindirse con un preaviso de un año, pero los inversores suelen incluir una 'cláusula de extinción' de 15 años, lo cual significa que un Gobierno que llegara al poder con un programa que persiguiera poner freno al poder no regulado de la gran minería tendría que esperar esos 15 años para poner en práctica sus reformas. Otra cláusula favorable a la industria en los APIE exige que las controversias se solucionen a través de un arbitraje internacional vinculante en lugar de los tribunales nacionales ordinarios; es decir, mediante litigios que requieren costosos equipos de abogados y que se dirimen en tribunales internacionales favorables a las empresas.

En Canadá, la transición a los APIE es lo que ilustra el giro hacia el neoliberalismo. En la década de 1970, la Agencia de Revisión de Inversiones Extranjeras vetó la entrada de nuevos inversores a Canadá. Los requisitos de desempeño incluían puntos como la creación de puestos de trabajo para canadienses, el uso de proveedores nacionales y la aprobación de la ubicación por parte del Gobierno para evitar desequilibrios

regionales. Hoy en día, estas serían ‘barreras no arancelarias al comercio’ inadmisibles y la atención del Gobierno canadiense ha pasado a centrarse en proteger a las empresas mineras que invierten en el exterior. Los abogados de las compañías sostienen firmemente que las sedes centrales no son responsables de las acciones de sus filiales en otros países, y mucho menos de las acciones de los subcontratistas. Las comunidades y los trabajadores y las trabajadoras que se enfrentan a empresas mineras por cuestiones sociales, ambientales y laborales lo tienen muy difícil para lograr que alguien asuma responsabilidades. Sin embargo, la reciente decisión de un juez de la Corte Suprema de la provincia canadiense de Ontario de escuchar las denuncias contra la empresa minera canadiense HudBay por violaciones y asesinatos en Guatemala sienta un precedente alentador.

Cómo los mineros ven a la gran minería

El creciente poder de la gran minería era tema de preocupación en una conferencia sindical que tuvo lugar en Toronto en 2012. En ella, compartieron sus historias delegados internacionales de Australia, México, Perú, Brasil, Sudáfrica y Mozambique, empezando por la agresiva campaña de las empresas mineras a favor de la ‘no intervención de terceros’. Actualmente, la gran minería está abiertamente en contra de los sindicatos y presiona incesantemente a los Gobiernos para que haya menos regulaciones y más ‘flexibilidad’ en torno a la mano de obra, promoviendo los contratos individuales en lugar de los convenios colectivos.

Una de las tendencias es el intento de convertir la salud y la seguridad en una función de gestión y negar el derecho de los trabajadores a conocer los riesgos laborales y a participar de manera activa en la creación de condiciones de trabajo seguras. En Canadá, donde Vale compró la explotación de níquel de Inco en 2006, la compañía ha rebajado drásticamente las estructuras para la participación activa de los trabajadores en materia de salud y seguridad; desde 2011, cinco mineros de Vale han sufrido accidentes de trabajo mortales, una estadística extremadamente alta para las minas canadienses.

Los mineros que asistieron a la conferencia también destacaron la fuerte presión de las empresas mineras para vender la idea de que la minería moderna puede ser sostenible, y que puede —y debe— autorregularse. Esto les sirve para restar importancia a la necesidad de establecer organismos gubernamentales de regulación e inspección, sindicatos activos y observatorios ambientales.

También se señaló que, en todos los países, los inversores mineros atraen a los Gobiernos y a las comunidades prometiéndoles que la minería creará puestos de trabajo. Pero la realidad es que cada vez se tiende más hacia minas que requieren un uso intensivo de capital y que emplean a un número cada vez menor de trabajadores fijos. Existe una fuerte presión por parte de las empresas para que se trabaje con contratistas, trabajadores extranjeros temporales y especialistas técnicos con contratos de corto plazo.

Finalmente, los delegados observaron la tendencia a que las empresas mineras negocien arrendamientos bajos en condiciones muy favorables para ellas, acompañada de su capacidad para mover capitales, con poca o ninguna transparencia, más allá del alcance de los países de acogida gracias a una escasa regulación y/o a la corrupción.

Así pues, los propios mineros están profundamente preocupados por el creciente poder de la gran minería. En ella ven una constante erosión de la seguridad laboral, los derechos laborales, la protección ambiental y

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

la seguridad en el lugar de trabajo. Las restricciones sobre el poder corporativo que antes garantizaban los organismos reguladores del Gobierno y los sindicatos a través de la negociación colectiva han desaparecido.

Cómo las empresas mineras se ven a sí mismas

Las empresas mineras se presentan públicamente a sí mismas como actores clave para el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad global; todo ello realizado de manera sostenible. Cuando hablan internamente, sin embargo, se centran en la *realpolitik* de la minería: la expansión corporativa, la rentabilidad y la gestión de los riesgos. James Cooney, cuando trabajaba para el gigante de la minería de oro Placer Dome, ofreció una fascinante visión de su industria en una conferencia que se celebró en 1995 en Reno.⁴ Su presentación, dirigida a un público de geólogos mineros y titulada 'Gestión del riesgo político en las Américas', comenzó exaltando el momento sin precedentes para el sector, ya que casi todos los países estaban abiertos a la inversión extranjera directa. Los riesgos que Cooney identificó para las empresas mineras en esta nueva era eran las relaciones con las comunidades aborígenes, las regulaciones ambientales, la minería en pequeña escala, el desarrollo sostenible y la distribución de la riqueza. Y luego explicó cómo las avispidas empresas mineras podían manejar cada uno de estos riesgos políticos.

Para abordar las relaciones con las comunidades aborígenes, Cooney abogaba por adoptar la estrategia canadiense de crear una organización nacional de minería en que líderes aborígenes cuidadosamente seleccionados y que estuvieran a favor de la minería desempeñaran un papel destacado. Para los Gobiernos latinoamericanos que consideraran que la minería y el medio ambiente eran algo incompatible, Cooney proponía crear una alianza corporativa con el Banco Mundial para organizar una conferencia internacional dirigida exactamente a aquellos Gobiernos que aún se mostraran reacios a acoger la minería con brazos abiertos. El riesgo de la desigualdad entrañaba reconocer un posible resentimiento por el hecho de que la visible riqueza que generaba la explotación minera fuera directamente exportada por una empresa extranjera o solo beneficiara a una pequeña élite en la capital del país. Las empresas mineras con visión de futuro debían contar con los Gobiernos anfitriones para que adoptaran instrumentos visibles de redistribución; no porque esta fuera una buena política pública, sino porque podía disminuir el riesgo de resistencias comunitarias a la empresa minera.

La relación íntima entre Gobiernos y empresas mineras

En este paraíso desregulado, los Gobiernos no solo han dejado de fijar límites a la gran minería; tanto en el Norte como en el Sur Global, los Gobiernos se han convertido en defensores activos de los intereses de las empresas mineras. El gobierno provincial de Jean Charest en Quebec (Canadá) basó su estrategia económica en el Plan Nord, presentado en mayo de 2011. El Plan comprometía 1.200 millones de dólares de los contribuyentes para construir grandes infraestructuras en el norte de la provincia con el objetivo de abrir los recursos mineros y forestales a la exportación. Las autoridades públicas salieron a cortejar a los grandes inversores extranjeros, pero mantuvieron un profundo silencio sobre cuestiones como los cánones y los regímenes fiscales, los mecanismos de redistribución y el reparto de los beneficios. En Quebec, como en América Latina y África, la idea era desarrollar megaproyectos vinculados con corredores de transporte que hicieran llegar minerales no procesados a los mercados mundiales.

Los trabajadores del acero de Quebec plantearon una serie de duras preguntas sobre el Plan Nord en sus conferencias anuales de 2011 y 2012. ¿Se utilizarían estos nuevos proyectos mineros para proporcionar ingresos a los tan loados programas sociales de Quebec? ¿Se traería a trabajadores extranjeros para construir las minas? ¿Cuántos puestos de trabajo fijos y de calidad se crearían realmente? ¿Los planes para exportar minerales suponían, en realidad, exportar puestos de trabajo? ¿Qué pasaba con el impacto ambiental sobre los frágiles ecosistemas del norte y el papel de las comunidades aborígenes?

Los estudiantes que se movilizaron en las protestas de la llamada ‘primavera del arco’ o ‘primavera quebecuesa’ en 2012 no tardaron en establecer la conexión entre un Gobierno liberal que se declaraba pobre como justificación para incrementar el coste de la matrícula universitaria mientras se dedicaba a gastar dinero en infraestructuras para empresas mineras privadas. Estos temas confluyeron y desencadenaron una auténtica crisis política que provocó la caída del gobierno liberal, aunque el gobierno que lo reemplazó mostró poca predisposición a establecer una relación diferente con la gran minería.

Al parecer, el papel activo de los Gobiernos a la hora de apoyar a ‘sus’ empresas mineras no conoce límites. En Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha sido una institución clave que históricamente ha promovido una estrategia económica nacional para controlar los recursos naturales del país. En los últimos años, el mantra del Banco ha sido “creando un Brasil competitivo en una economía global”. Esto se ha traducido en grandes préstamos para la expansión mundial de compañías como la minera Vale. Luis Inácio Lula da Silva, reconocido dirigente sindical y expresidente de Brasil, ha viajado con frecuencia con ejecutivos de empresas brasileñas. En África, negoció echando mano a los sentimientos de solidaridad entre los países del Sur. Tras abandonar la presidencia, en noviembre de 2013, se unió al actual presidente de Vale, Murilo Ferreira, en otra misión a Mozambique. Su agenda incluyó hacer equipo con Ferreira para presionar al ministro de Trabajo mozambiqueño con el fin de que incrementara la cuota del 15 por ciento de trabajadores extranjeros para los futuros proyectos de Vale.

El papel activo del Gobierno canadiense en apoyo de la minería tiene varias facetas. A pesar de la presión activa de sindicatos y ONG para que se adopten mecanismos de obligado cumplimiento que sirvan para regular a las empresas mineras canadienses en el extranjero, el Gobierno de Canadá ha estado aumentando de forma constante su respaldo directo a estas. Los ejecutivos de empresas mineras participan en las misiones de Team Canada para promover el comercio. En algunos casos, la embajada de Canadá sirve como base virtual de operaciones durante la fase de puesta en marcha de proyectos mineros, e incluso en fases posteriores. La ayuda bilateral relacionada con la minería ha sido diversa, e iría desde las presiones en la sombra de la embajada en Honduras y Ecuador a las políticas favorables a la industria, pasando por la financiación directa para volver a redactar los códigos de minería de Colombia.⁵ Funcionarios gubernamentales de la provincia de Alberta —donde se están desarrollando grandes proyectos de arenas bituminosas, catastróficos para el medio ambiente— viajaron a Bolivia para ofrecer asesoramiento sobre la gestión del gas natural.

Estas iniciativas del Gobierno canadiense de manifiesto apoyo a las empresas mineras se están expandiendo. El Servicio de Delegados Comerciales del país se asoció recientemente con la ONG de desarrollo internacional World Vision y la Asociación de Prospectores y Promotores de Canadá (PDAC) para publicar un manual dirigido a las corporaciones. *Prevención de conflictos en la exploración: Manual para exploradores y empresarios mineros* utiliza un enfoque basado en la educación popular para ayudar a las empresas mineras a conseguir el consenso de las comunidades para sus proyectos. El primer paso entraña analizar el contexto e identificar a los actores clave: terratenientes, grupos de mujeres, jefes tradicionales, sacerdotes locales,

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

jóvenes desempleados y grupos contrarios a la minería. El segundo paso consiste en definir las posiciones de esos actores, así como sus intereses y relaciones de poder internas. El manual incluye actividades para determinar el estatus, los intereses, la influencia y las redes de los actores en cuestión, lo que permite a la empresa decidir qué riesgo entraña cada uno a la hora de detener el proyecto minero. Lamentablemente, no parece existir ninguna iniciativa equivalente del Gobierno canadiense para financiar una herramienta con la que las comunidades rurales puedan decodificar y cuestionar las estrategias de las grandes empresas mineras.

La agencia de desarrollo internacional de Canadá ya había empezado a desviar dinero de la ayuda hacia proyectos de colaboración con empresas mineras antes de 2013, cuando entró a formar parte de una alianza para crear el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo. World Vision, Plan International y el Servicio Universitario Mundial de Canadá (WUSC) se aliaron con Barrick Gold, Rio Tinto e Iamgold en 2011 para llevar a cabo proyectos de formación y desarrollo comunitario en paralelo a las explotaciones mineras. Después de esta alianza que estrechó las relaciones entre la ayuda y el comercio, se abrió aún otro mecanismo de financiación parecido para desplegar proyectos entre ONG y empresas mineras, destinado específicamente a una zona rica en minerales como es la región andina. Mientras tanto, las organizaciones que se dedican a la sensibilización con una visión crítica de la conducta de las empresas mineras en el extranjero, como serían Development and Peace y Kairos, han visto cómo se les van recortando los fondos públicos. Sin embargo, a pesar de las críticas públicas por desviar dinero de la ayuda para cooperar con las empresas mineras a la hora de pacificar a las comunidades locales, la práctica sigue en pleno auge.

Poder a través de actividades ilegales

En mayo de 2013, se publicó un estudio sobre el apoyo de la embajada de Canadá a una explotación en México de Blackfire Exploration Ltd., una compañía minera con sede en Alberta. El estudio documentaba la facilidad con la que una empresa minera utilizaba medios ilegales para afirmar su poder, y también lo lejos a lo que llegaba el apoyo del Gobierno canadiense. Blackfire tuvo una fuerte participación diplomática durante una larga y conflictiva situación. Muchos miembros de la comunidad eran muy contrarios a la mina de Chicomuselo, en Chiapas, porque alteraba sus actividades agrícolas y perjudicaba el medio ambiente. Los sobornos de Blackfire al alcalde de la zona para controlar a los opositores de la comunidad se hicieron públicos. Un guardia de seguridad privada de Blackfire fue acusado del asesinato del líder comunitario Mariano Abarca. A pesar de la muerte de Abarca, la suspensión de las operaciones de la mina por daños ambientales y suficientes pruebas de la corrupción de Blackfire como para justificar una investigación policial en Canadá, la embajada siguió respaldando a la empresa. Como gesto de despedida para demostrar su apoyo, los funcionarios de la embajada aconsejaron a Blackfire que utilizara las cláusulas inversor-Estado del TLCAN para demandar al estado de Chiapas, con el argumento de que el cierre de la mina había reducido las ganancias proyectadas de su inversión.⁶

Poderosos actores globales, como Vale, recurren de forma habitual a medios ilegales. Compañeros y compañeras de Brasil llevan mucho tiempo denunciando la propensión de Vale a comprar a líderes sindicales, comunidades y gobiernos. Durante mi primera visita a Moatize, donde estaba ubicada la mina de carbón de Vale, la información que ofreció el administrador del distrito a nuestra delegación sindical hacía referencia al vehículo que Vale había regalado al jefe sindical de la provincia. Unos meses más tarde, los trabajadores que estaban construyendo la mina apedrearon el vehículo durante una huelga salvaje. Líderes sindicales locales han contado cómo a menudo se les ofrece seguridad laboral o tarjetas de crédito de la compañía a cambio de

su silencio sobre temas relacionados con el lugar de trabajo.

En Brasil, un exdirector descontento del Departamento de Inteligencia y Seguridad Corporativa de Vale denunció algunas de las prácticas de la compañía en 2013, presentando documentos a la fiscalía estatal brasileña que demostraban que Vale se dedica al espionaje generalizado en todas sus operaciones en Brasil, accediendo a los registros telefónicos de periodistas destacados e infiltrándose en grupos como el Movimiento de los Sin Tierra y Justicia Sobre Rieles, una coalición que apoya las luchas comunitarias en el norte de Brasil.⁷

Para trabajadores y trabajadoras y comunidades locales, el sueño de lo que traerá consigo un proyecto minero es sencillo: empleos y vivienda, educación y atención de la salud, un futuro mejor para sus hijos e hijas. Estas esperanzas se desvanecen rápidamente. Cuando su decepción se traduce en ira y actos de resistencia, se encuentran rápidamente enfrentados a otro fenómeno de la minería contemporánea: la criminalización de la disidencia. Con demasiada frecuencia, los disidentes deben hacer frente a fuerzas de seguridad del Gobierno y de las empresas mineras, que actúan simultáneamente en su contra.

Poder a través de grupos de cabildeo y abogados

Establecer nuevas medidas normativas para hacer que las empresas mineras rindan cuentas por sus actividades en el extranjero ha sido durante mucho tiempo una preocupación de los grupos de la sociedad civil en Canadá y en otros lugares del Norte Global. Organizaciones canadienses han participado en procesos tripartitos, con empresas mineras y gobiernos. También han conseguido un amplio apoyo a proposiciones de ley presentadas por parlamentarios o parlamentarias independientes. En todos los casos, sin embargo, el fervor de las organizaciones de la sociedad civil a la hora de exigir normas más estrictas y que vayan acompañadas de sanciones se ha visto completamente eclipsado por las actividades de cabildeo de la industria.

En 2010, numerosos grupos de la sociedad civil movilizaron un importante apoyo en torno a la Propuesta de ley C-300, promovida por un parlamentario independiente para fomentar “buenas prácticas y garantizar la protección y la promoción de normas internacionales de derechos humanos con respecto a las actividades de minería, petróleo o gas de compañías canadienses que operan en países en desarrollo”. Las denuncias planteadas en el marco de la ley propuesta darían lugar a una investigación del Gobierno canadiense. Y las empresas que no cumplieran con las directrices de responsabilidad social corporativa no podrían acogerse a la financiación de Export Development Canada (el organismo federal de fomento de las exportaciones), el Plan de Pensiones de Canadá ni el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Las empresas mineras presionaron duro; solo Barrick se reunió con 22 parlamentarios y tres senadores, mientras que la Asociación Canadiense de Minería lo hizo con 29 parlamentarios. Entre las demás compañías que registraron grupos de presión contra el mismo proyecto de ley se encontraban Vale, Goldcorp, Kinross y Iamgold. La intensa presión corporativa dio sus frutos. El Proyecto de ley C-300 nunca llegó a aprobarse.

El mundo de los grupos de presión y las puertas giratorias entre el Gobierno y los altos cargos de corporaciones prácticamente no está sometido a ninguna regulación, está rodeado de un gran secretismo y parece ser muy próspero, aunque reciba cierta atención mediática en momentos puntuales. En los Estados Unidos, por ejemplo, una noticia publicada por el diario *Washington Post* después de una explosión en abril de 2010 que mató a 29 mineros en una mina de Massey Energy, en el estado de Virginia Occidental, reveló que más de 200 extrabajadores del Congreso, reguladores federales y legisladores estaban empleados en la industria

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

minera. Ocupaban puestos que iban desde el de cabildero al de consultor, pasando por el de alto ejecutivo. Entre ellos, muchos trabajaban para empresas del carbón con algunos de los peores antecedentes en materia de seguridad de la industria minera.⁸

En Canadá, el exministro conservador Chuck Strahl pasó de ocupar un puesto en el organismo de control del Gobierno del Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia a un empleo en el sector privado. Poco después, su nombre apareció como cabildero registrado para Enbridge. Enbridge es una filial de Northern Gateway Pipelines, uno de los tres sistemas de transporte con gasoducto para hacer llegar el petróleo de arenas bituminosas a los mercados mundiales. Según algunas noticias recientes, los servicios de seguridad canadienses, cuyas operaciones se había encargado de supervisar el propio Strahl, habían estado espiando a opositores al gasoducto.

Poder a través de la imagen corporativa

Para las empresas mineras, crear una buena imagen corporativa, en su propio país y a escala internacional, es tan importante como producir hierro o níquel. Las empresas mineras se alían con instituciones globales de prestigio, envolviéndose, por extensión, del aura de estas instituciones. Las empresas han puesto en marcha un 'lavado verde' con su adopción del lema de la 'sostenibilidad' y su retórica sobre 'normas ambientales básicas'.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ofrece otra herramienta para el 'lavado azul' (en referencia al color con el que se identifica a este organismo multilateral). Anunciado en el Foro Económico Mundial de 1999 por el entonces secretario general, Kofi Annan, el Pacto Mundial sirve para legitimar a las grandes corporaciones a través de su asociación con los principios de sostenibilidad y responsabilidad social de la ONU, que abarca ámbitos como los derechos, la lucha contra la corrupción, el medio ambiente y el trabajo. El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Organización Internacional de Normalización (IOS) desempeñan un papel parecido. El hecho de seguir los criterios de Global Reporting Initiative (GRI), una organización a través de la que las corporaciones publican informes anuales sobre su aplicación de todos estos principios, aumenta su credibilidad y ayuda a preservar la ficción de que la autorregulación es una práctica eficaz. Las empresas se presentan como actores globalmente responsables mediante sus llamativas publicaciones internas, sin que haya terceras partes que comprueben la veracidad de los contenidos.

La imagen también se intenta promover en el plano nacional y local. En lugar de ejercer una ciudadanía corporativa responsable mediante el pago de cánones o impuestos, lo que proporciona a los Gobiernos de acogida una fuente de ingresos para construir infraestructuras y poner en marcha programas sociales, las empresas mineras luchan por conseguir el máximo de exenciones fiscales. Luego se presentan como buenos ciudadanos a través de programas de 'responsabilidad social corporativa' y actividades filantrópicas que les garantizan mucha visibilidad y les supone un costo muy bajo. Estos van desde escuelas, clínicas y eventos deportivos cerca de las minas a instituciones sociales y culturales de alto perfil a nivel nacional.

Barrick ha creado una imagen positiva de la empresa presentando a su presidente fundador, Peter Munk, como un gran filántropo. Las historias sobre violaciones y saqueos en las explotaciones de Barrick en Tanzania y Papúa Nueva Guinea, y de cómo los Gobiernos de Chile y Argentina han frenado finalmente los planes de Barrick para desplazar glaciares en los Andes, casi nunca saltan a la prensa. La imagen de Barrick en

Canadá, cultivada con mucho esmero, le debe mucho al Centro Cardiovascular Peter Munk del Hospital General de Toronto y al espléndido edificio histórico, perfectamente restaurado, que ocupa la Escuela Munk de Asuntos Globales en la Universidad de Toronto. La iniciativa más reciente en esta misma línea es la Galería Barrick Gold en el Museo Real de Ontario, donde se suma a la Galería Vale Earth. El museo prevé una extensa programación en estas galerías, destinada a niños y niñas de escuelas, con el objetivo de introducirlos en la importancia de la minería. Si los niños y niñas que viven cerca de las minas de oro de Barrick en Tanzania o de las minas de carbón de Vale en Mozambique pudieran organizar una exposición con sus historias y dibujos sobre la minería...

Megaproyectos mineros y desarrollo nacional

Las grandes empresas mineras sostienen que las fronteras nacionales son cosa del pasado. Estas corporaciones operan más en el mundo de los flujos que en el de los territorios, estableciendo sus cadenas de suministro globales para enlazar un enclave minero autosuficiente con otro. Todos ellos se articulan en flujos globales de información, capital, tecnología, servicios, mercados, fuerzas de seguridad privada y legitimidad. Incluso la mano de obra forma parte de ese flujo global. Para construir su mina en Mozambique, Vale prometió que crearía empleos, pero también presiona constantemente para que el Gobierno permita la entrada de más trabajadores extranjeros. En un momento dado de la construcción, un subcontratista de Vale que opera en 30 países, Kentz, trasladó a la zona a cientos de trabajadores filipinos con contratos temporales.



Margie Adam / ArtWork

Una típica explotación minera de hoy en día, ya se encuentre geográficamente aislada con solo vuelos de entrada y de salida, o esté situada en una zona escasamente poblada, un pueblo rural con escasos recursos o un territorio de caza y pesca aborigen, adquiere las características de un enclave. La empresa minera es básicamente autosuficiente, y opera en una escala muy superior a su contexto local, haciendo llegar desde el

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

exterior todo lo que necesita, desde el material de construcción a los gigantescos equipos, y desde la comida a la mano de obra. Muchas de ellas contratan sus propias fuerzas de seguridad privada. En muchos países, estos acuerdos son sancionados por una pequeña élite que pretende ser árbitro de la soberanía nacional, y que está dispuesta a legitimar la autonomía del enclave minero a cambio de un pedazo del pastel, a veces abiertamente, a veces bajo cuerda.

Con los enclaves de megaproyectos se está produciendo un doble proceso, ya que están destruyendo espacios económicos nacionales al tiempo que se articulan entre sí para construir nuevos espacios globales. Estos espacios globales no se basan en territorios y fronteras nacionales, sino en flujos. Se caracterizan por una 'flexibilidad' que es la marca distintiva del neoliberalismo. Transnacionales gigantes y redes de pequeños contratistas y subcontratistas repartidos por todo el mundo están totalmente articulados en un flujo o cadena global que se extiende fácilmente a lo largo de kilómetros y continentes para crear un nuevo y poderoso instrumento sin fronteras con el que ejercer el poder.⁹

Las empresas mineras operan en estos nuevos espacios globales con un asombroso sentido de tener pleno derecho a ello. En realidad, identifican 'el nacionalismo de los recursos' como la mayor amenaza que puede limitar 'sus derechos y beneficios'. Los informes anuales de 2012 y 2013 sobre los principales riesgos que enfrenta la industria minera elaborado por el servicio de asesoramiento empresarial Ernst & Young mencionan cuatro formas en que los Estados ejercen el 'nacionalismo de recursos': la titularidad pública, el aumento de los impuestos y los cánones, las restricciones sobre las importaciones y las exportaciones, y la reforma de la legislación minera. Otras consultoras corporativas adoptan una visión más amplia, e incluyen puntos como los requisitos de desempeño, como el abastecimiento local de bienes y servicios, la contratación local y el 'reparto de beneficios obligatorio' (que implicaría el procesamiento de minerales dentro del propio país).

En otras palabras, las políticas sobre minería por las que trabajadores y trabajadoras, comunidades, ciudadanía y generaciones futuras están presionando a nuestros Gobiernos, son consideradas por las empresas mineras como su mayor amenaza. Los Gobiernos que ejercen una sabia custodia de sus recursos naturales no renovables son denunciados y atacados con todos los instrumentos que tienen a su alcance estas poderosas empresas mineras.

Trabajadores y comunidades luchan contra el poder de la gran minería

Tras haber esbozado cómo las empresas mineras contemporáneas obtienen, ejercitan y legitiman su poder, podemos analizar mejor los puntos en los que se puede incidir para cuestionarlas. Las empresas mineras operan a nivel mundial. Los y las activistas debemos hacer lo mismo, construyendo redes que pongan en contacto a las personas afectadas por determinadas empresas mineras en distintos continentes. Esto significa crear mecanismos para compartir información, estrategias, acciones comunes y solidaridad mutua. Las redes que vinculan solo a comunidades, o solo a ecologistas, o solo a sindicalistas tienen una eficacia limitada, teniendo en cuenta las operaciones polifacéticas de la gran minería. La Articulación Internacional de Afectados por Vale, creada en 2010, ha estado trabajando para encontrar nuevas maneras de operar a escala mundial. En su reunión fundacional participaron delegados y delegadas de 14 países. Y entre sus integrantes, se cuentan movimientos populares que luchan contra el acaparamiento de tierras y la precariedad laboral, sindicalistas, activistas por los derechos humanos y el medio ambiente, personas del mundo académico, defensores de las políticas públicas y grupos de base confesional de varios países.

Por otro lado, se necesitan con urgencia estrategias de contrainformación. Es necesario que se escuchen las voces de las propias regiones mineras en todo el mundo para hacer frente a la dudosa veracidad de los informes de las empresas. En los informes de sostenibilidad de Vale, por ejemplo, las dos comunidades que se construyeron en Mozambique mediante un proceso de reasentamiento forzoso se presentan como modelos de excelencia. Sin embargo, para las familias mozambiqueñas a las que se obligó a abandonar sus tierras para dar paso a las minas a cielo abierto, el traslado ha sido una pesadilla caracterizada por las promesas incumplidas de Vale y su propio Gobierno. Cinco años después del reasentamiento forzoso, aún quedan por resolver varios temas relacionados con tierras, agua, electricidad e indemnizaciones. Las casas donde se realojó a las familias, de muy mala calidad, comenzaron a caerse después de la primera temporada de lluvias. Como ni Vale ni el Gobierno mozambiqueño estaban dispuestos a resolver sus problemas, las personas reasentadas bloquearon la línea de ferrocarril que lleva el carbón al puerto de Beira, en 2012. Los problemas y las protestas no han cesado. La Articulación Internacional de Afectados por Vale publicó un *Informe de Insostenibilidad de Vale*¹⁰ en 2012, con el objetivo de contrarrestar los informes anteriores de la compañía. El formato gráfico y los apartados incluidos eran similares a los del informe de la empresa, pero el contenido recogía testimonios de los trabajadores y las comunidades afectadas. La Articulación también logró que Vale fuera elegida como 'peor empresa del mundo' en los galardones de Public Eye Award, junto con el Foro Económico Mundial de Davos, en 2012. Otras redes globales también están ofreciendo contrainformación como estrategia importante. La red Protest Barrick Network también publicó un informe alternativo al propio informe anual de Barrick en 2013.¹¹

También se pueden organizar movilizaciones dirigidas a accionistas específicos, como iglesias, universidades y fondos de pensiones de empleados del sector público. Los accionistas se ponen nerviosos cuando la distancia entre la imagen corporativa y la crudeza de la realidad en torno a la explotación minera se expone al dominio público.

La Fundación Bench Marks de Sudáfrica, que surgió a raíz de las campañas de desinversión que apoyó la iglesia durante el apartheid, actúa en dos niveles para documentar estas brechas. En primer lugar, investiga las declaraciones de las propias empresas sobre las políticas que aplican y su material publicitario para establecer los criterios de base que se ha fijado la compañía. Un tiempo después, Bench Marks realiza un segundo estudio, en el que evalúa la brecha entre las políticas y las prácticas reales de la empresa.

Unas semanas antes de la masacre perpetrada por la policía contra 34 huelguistas en las minas de Marikana, en Sudáfrica, Bench Marks había publicado un documento¹² que medía la increíble distancia entre las promesas de la empresa de platino Lonmin y las verdaderas condiciones de trabajo y de vida de los mineros, alojados en chozas miserables, con contratos de trabajo de migrantes de corto plazo y entonces aún criticados por "perturbar la confianza de los inversores" al hacer huelga para reivindicar un salario digno.

La otra estrategia de Bench Marks consiste en trabajar con las comunidades locales, garantizando que los y las jóvenes, las mujeres y los trabajadores puedan explicar sus propias historias sobre el impacto de la empresa minera. Así, observadores y observadoras comunitarios hacen entrevistas y toman fotos, y luego comparten sus historias con otras comunidades por internet. De este modo, dejan de ser solo víctimas de la minería para convertirse en protagonistas.

Existen muchas otras estrategias que se están usando en todo el mundo para socavar el poder de la gran minería. Entre estas, encontramos los tribunales de los pueblos, las campañas globales para poner fin a la

La gran minería a debate: de Canadá a Mozambique

Judith Marshall

impunidad corporativa, campañas contra los acuerdos comerciales, en torno a temas de agua y otros bienes comunes, sobre el calentamiento global, en torno a instituciones financieras internacionales, o vulneraciones de derechos. Todos nosotros y nosotras nos enfrentamos al reto de trazar los puntos de conexión, poniendo al descubierto cómo la minería se vincula con los acaparamientos de tierras, la pobreza y la exclusión social, la especulación financiera, el consumo excesivo, las culturas del usar y tirar, y la avaricia corporativa, todo lo cual pone de relieve la necesidad de transformar el sistema global imperante y proteger nuestro planeta.

La colaboración a través de la Articulación Internacional de Afectados por Vale ha tenido momentos en los que las líneas de batalla con las empresas mineras y la necesidad de resistir se revelan con una claridad sorprendente. Uno de esos momentos llegó con una carta de un misionero laico brasileño que había participado en un evento de la red en Brasil antes de ir a enseñar a la escuela de una misión en Mozambique. Varios meses después de llegar a Nampula, informó a la red de que a la misión habían estado llegando campesinos de la zona explicando historias de desconocidos que llegaban a sus granjas, midiendo tierras, y preguntando acerca de los cultivos y de lo que ganaban cada año. Los desconocidos también habían pedido a los campesinos sus documentos de identidad. Estos se les devolvieron más tarde, con un pago y un recibo para que lo firmaran. El pagador era Vale Mozambique. Los campesinos estaban entusiasmados, ya que los desconocidos les habían ofrecido más dinero del que habían ganado el año anterior, sin comprender que acababan de perder sus tierras y que estas pasaban a ser propiedad de una poderosa empresa minera.

Muchos de nosotros y nosotras, activistas del movimiento de afectados por Vale, respondimos al misionero, expresando nuestra indignación. Didi Travesso, un líder sindical brasileño muy querido y recientemente fallecido del CSP-Conlutas, respondió casi con poesía:

Se mueven como si fueran los dueños del mundo...

Con recibos y con todo lo que necesitan para demostrar que son señores de todos los niveles, por encima y por debajo del suelo, de un lado al otro de nuestras vidas.

Conjugan verbos como dividir, lucrar, poseer, mandar.

¿Y nosotros?

Respondemos con unir, compartir, resistir, soñar.

Notas finales

- 1 Ferguson, J. (2006). *Africa in the neoliberal world order*. Durham: Duke University Press; Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal; Klein, Naomi. (2015). *Esto lo cambia todo*. Barcelona: Paidós Ibérica; Stiglitz, J. (2002). *El malestar en la globalización*. Madrid: Taurus.
- 2 Harvey (2005), op.cit.
- 3 Wainwright, H. (2014). *State of counter-power: How understanding neoliberalism's cultural underpinnings can equip movements to overthrow it*. En *State of Power 2014: Exposing the Davos class*, pp. 81-89. Ámsterdam: TNI. http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/state_of_counter_power.pdf
- 4 Cooney, J. P. (1995). *Managing political risks in the Americas: The role of the exploration geologist*. Ponencia presentada en la conferencia 'Geology and Ore Deposits of the American Cordillera', Reno, Nevada, 13 de abril.
- 5 Gordon, T. (2012). *Canadian development aid takes on corporate colouring*. Toronto Star, 29 de noviembre. http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/2012/11/29/canadian_development_aid_takes_on_corporate_colouring.html
- 6 Moore, J. y Colgrove, G. (2013). *Corruption, murder and Canadian mining in Mexico: The case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy*. Ottawa: USW, Common Frontiers and Mining Watch. http://www.miningwatch.ca/files/blackfire_embassy_report_eng_0.pdf
- 7 Marshall, J. (2013). *Secret surveillance targets civil society: Much of Canada's spying is done on behalf of corporations*. Ottawa: CCPA Monitor. http://www.policyalternatives.ca/authors/judith_marshall
- 8 Kindy, K. y Effen, D. (2010). *W.Va. mine disaster calls attention to revolving door between industry, government*. *Washington Post*, 17 de abril. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/17/AR2010241702990.html>
- 9 En este apartado me baso en gran medida en el trabajo de Ferguson (2006), op. cit.
- 10 *Articulación Internacional de los Afectados por Vale*. (2012). *Vale Unsustainability Report*. http://www.justicanostrilhos.org/sites/default/files/Relatorio%20Insustentabilidade%20Vale%202012_en.pdf
- 11 Saunders, S. (ed.). (2013). *Debunking Barrick*. www.protestbarrick.net/article.php?id=889
- 12 *Bench Marks Foundation*. (2013). *Coping with unsustainability. Policy Gap 7* (octubre). Johannesburgo, Sudáfrica: Bench Marks Foundation. http://bench-marks.org.za/policy_gap_7.htm

Judith Marshall es una activista global que ha trabajado y estudiado en Nueva York, Ghana, Holanda y Mozambique. Judith pasó ocho años en el Mozambique posterior a la independencia, trabajando en el Ministerio de Educación. Al regresar a Canadá, realizó su tesis doctoral sobre la alfabetización, el poder y la democracia en una fábrica de Mozambique. Recientemente se ha jubilado, después de 20 años como educadora laboral del Fondo Humanitario del Sindicato de Trabajadores de la Metalurgia de Canadá (USW). Durante todos esos años, viajó por África y América Latina para coordinar proyectos dirigidos a aquellas personas afectadas por empresas mineras transnacionales.



Traducción: Beatriz Martínez



www.tni.org/es/estadodelpoder2015